



## EN DEFENSA DEL PADRE MIGUEL VÁSQUEZ, PARROCO DE ARCATAO

La Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) y la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR) firmantes expresamos ante la opinión pública nacional e internacional nuestra profunda preocupación por las expresiones de odio, actos de intimidación y amenazas de violencia política a contra el padre Miguel Vásquez, párroco de la parroquia Fray Bartolomé Mártir en la municipalidad de Arcatao, departamento de Chalatenango, El Salvador.

El padre Miguel, como es comúnmente conocido por sus feligreses, ha sido un pilar fundamental de la comunidad de Arcatao desde la década de los 80s y un referente espiritual y moral que, desde su posición como párroco, promueve el desarrollo de comunidades saludables, organizadas y pensantes en el departamento de Chalatenango.

Desde finales del año 2020 el padre Miguel ha denunciado el acoso que sufren las comunidades por parte de efectivos militares destacados en los municipios de Nueva Trinidad y Arcatao con la excusa de prevenir el tráfico transfronterizo por causa de la pandemia COVID 19. Además, hizo ha hecho eco a las denuncias contra la militarización de estos municipios ya sus acciones violan el derecho de movilidad de las comunidades de salvadoreños que viven en los ex bolsones ubicados en honduras, estas comunidades dependen del cruce de la frontera para el comercio y el acceso a servicios básicos.

Durante la pasada campaña electoral para la alcaldes y diputados en El Salvador, el padre Miguel también denunció numerosas irregularidades que se dieron en Arcatao, como el historial de corrupción del candidato a alcalde por el partido Nuevas Ideas, y aseguro haber documentado la compra venta de votos por ciudadanos salvadoreños en el exterior que son financistas del partido en le poder. Además de las denuncias hechas públicas en una en una carta, el padre Miguel hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral a investigar irregularidades en la campaña local de Arcatao, que el partido Nuevas Ideas ganó solamente por un voto de margen, y pidió que se investiguen las denuncias de compra de votos, las fuentes de financiamiento de la campaña, la razón por que los efectivos militares no permitieron que los salvadoreños que viven en los bolsones transfronterizos ejercieran su derecho al sufragio y que se castiguen las violaciones al código electoral.

Por su espíritu de denuncia ante la injusticia, el padre Miguel es ahora el blanco de ataques y amenazas por parte de individuos con trayectorias políticas cuestionables que han sido fortalecidos por la política de odio que se promueve en el país desde los niveles políticos más altos. Esta violencia política también ha afectado a otros líderes de partidos políticos locales: el 6 de marzo el cuerpo sin vida de Concepción Varela, candidato a alcalde por el Partido de Concertación Nacional (PCN) en el municipio Nueva Trinidad, fue encontrado en un potrero después de haber recibido amenazas de muerte y estar desaparecido por 10 días.

Como organizaciones sociales nos preocupa el ataque sistemático a la institucionalidad democrática del país y el potencial de violencia política que actualmente se manifiesta en las comunidades de Arcatao y Nueva Trinidad. Estamos alerta ante la escalada de violencia política en nuestras comunidades y hacemos un llamado:

- A que las autoridades correspondientes a garanticen la integridad física y moral del padre Miguel Vásquez y que investiguen las irregularidades en el proceso electoral y todas las expresiones de violencia contra líderes sociales de manera que las garantías y libertades constitucionales sean respetadas para todos los salvadoreños.
- A las instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, a monitorear la situación post electoral de El salvador y activar sus mecanismos de protección y denuncia ante cualquier violación de derechos humanos.
- A las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones solidarias hermanas a nivel nacional e internacionales a ejercer un papel de vigilancia activa, defender la institucionalidad democrática y denunciar todo acto de corrupción política y las violaciones de derechos humanos en El Salvador.